

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Numeros sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

El Presidente del Consejo de Ministros al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación:

Áviles 25 de agosto á las ocho y 50 minutos de la noche.

SS. MM. la Reina y el Rey y su augusta Real familia han llegado á las cuatro de la tarde sin novedad á esta villa, que honrarán con su presencia el día de mañana, SS. MM. han recorrido ya á estas horas á plé y sin escolta la mayor parte de la población, queriendo satisfacer con su presencia el deseo que precipita á la multitud por todas las avenidas de Palacio. La Reina no se cansa de permanecer en este país, donde cada pueblo se empeña en superar á los demás al manifestar su adhesión á SS. MM.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR N.º 451.

Los Sres. Alcaldes de esta provincia participarán á este Gobierno dentro del término de doce días, si Antonio Luengas, difunto, ha pertenecido á su respectivo distrito, y si Juan Agras pertenece al mismo, procediendo á la captura de éste si fuese habido, y conduciéndolo con seguridad á mi disposición. A continuación se insertan las señas de ambos. Orense 26 de agosto de 1858.—El Gobernador, Hermegildo Gutiérrez.

Señas de Antonio Luengas.

Edad como de 50 años, pelo rubio, cerrado de barba, color blanco, estatura mediana.

Idem de Juan Agras.

Edad como de 45 años, estatura 5 pies, pelo y ojos negros, nariz re-

gular, barba poblada, cara redonda, color trigueño, algo cargado de hombros.

Número 452.

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento con fecha 3 de julio último me comunica la Real orden siguiente.

La interpretación generalmente dada á los Reales decretos de 19 de agosto de 1847 y 15 de febrero de 1854, respecto á la limitación que para los Profesores Veterinarios de segunda clase establecieron en la curación de animales domésticos, había ya hecho sentir la necesidad de declarar y fijar el verdadero espíritu de ambas disposiciones. Tuvo por objeto la Real orden de 31 de mayo de 1856 deslindar las atribuciones que conforme á los precitados Reales decretos y á la legislación vigente corresponden á cada una de las diversas clases en que se halla dividida la profesion veterinaria; y sin embargo, últimamente D. Marcelo Rodríguez Villajos, Albeitar realidad de Profesor Veterinario de segunda clase, establecido en Talavera de la Reina, acudió á S. M. en queja de haberle sido impuesta la multa de 100 rs. por la asistencia facultativa que prestó en la enfermedad de una res vacuna propia de uno de sus clientes; mientras que en la misma población existen Albeitares-herradores á quienes no se les prohibe curar toda clase de animales, alegando para ello la autorización de su título y la limitación arriba mencionada.

Enterada la Reina (Q. D. G.), y considerando que el espíritu de las precitadas disposiciones no pudo ser el de dar mayores facultades á los Albeitares que á los Veterinarios de segunda clase, procedan ó no de escuela subalterna; ni tampoco que á los Albeitares que pasan á Veterinarios de segunda clase, mejorando su categoría despues de nuevo examen y depósito, se les coarte sus atribuciones y pierdan el derecho

que como simples Albeitares tenían: S. M., oido el Real Consejo de Instrucción pública, de conformidad con su parecer y con lo propuesto por la Dirección general del ramo, se ha servido mandar se amplie la Real orden de 31 de mayo de 1856, autorizando á los Veterinarios de segunda clase para la curación de todos los animales domésticos, como lo están los Albeitares; reservando para los de primera clase los cargos superiores de la profesion y demás derechos que los concede la ley de 9 de setiembre de 1857 y el Real decreto de 14 de octubre siguiente, estableciendo, á fin de evitar dudas en los casos de elección oficial, la siguiente escala de preferencia indicada en dicho Real decreto, á saber:

Veterinario de primera clase.

Veterinario puro ó de la antigua escuela de Madrid.

Veterinario de segunda clase, procedente de escuela.

Veterinario de segunda clase por pasantía.

Albeitares-herradores.

Y finalmente, Albeitares.

Pudiendo intervenir todos en los casos de curación general.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.

La que se inserta en este periódico oficial para conocimiento del público y efectos oportunos. Orense agosto 27 de 1858.—El Gobernador, Hermegildo Gutiérrez.

Número 453.

En la Gaceta de Madrid número 236 del martes 24 del actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REALES ORDENES.

Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en este Ministerio con motivo

de las dimisiones presentadas en 25 y 26 de junio último por el Presidente y Vocales de la Comisión de Códigos, establecida por Real decreto de 1.º de octubre de 1856, la Reina (Q. D. G.) no ha tenido á bien admitir las referidas dimisiones del Presidente D. Manuel Cortina, y de los Vocales D. Pedro Gomez de la Serna, D. Pascual Bayarri, D. Juan Manuel Gonzalez Acevedo, D. José Ibarra, Don Manuel Garcia Gallardo y D. Francisco de Cárdenas; y ademas se ha servido adoptar las disposiciones siguientes:

Primera. La Comisión de Códigos continuará en sus trabajos, dedicándose con preferencia á la ley hipotecaria, la orgánica de Tribunales, la de Enjuiciamiento criminal y la reforma del Código penal vigente; y S. M. espera que seguirá desplegando en este servicio el celo, la actividad y la inteligencia que hasta hoy la han hecho merecedora de su Regia confianza.

Segunda. Por este Ministerio se encargarán á la Comisión de Códigos las demás reformas que reclamen las necesidades imperiosas y urgentes de la administración de justicia, remitiéndole los proyectos ó bases de las mismas.

Tercera. S. M. se reserva en su día resolver lo oportuno acerca de la creación de Vocales ponentes para activar y facilitar todo lo posible los importantes trabajos de la codificación y reforma de las leyes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de agosto de 1858.—Fernandez Negrete.—Sr. Presidente de la Comisión de Códigos.

La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien admitir la dimisión que ha hecho D. José Maria Antequera del cargo de Secretario de la Comisión de Códigos para que fuese nombrado por Real orden de 20 de junio último, reservándose utilizar oportunamente sus servicios.

De Real orden lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1858.—Fernandez Negrete.—Sr. Presidente de la Comisión de Códigos.

La Reina (Q. D. G.) se ha servido nombrar en comisión para el cargo de Secretario de la Comisión de Códigos, vacante por dimisión de D. José Maria Antequera, á D. Alejandro Diaz Zafra, Abogado fiscal cesante del Tribunal ma-

vor de Cuentas, que ya lo ha desempeñado interinamente.

De Real orden, lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de agosto de 1858. — Fernandez Negrete. — Señor Presidente de la Comisión de Códigos.

DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD.

Negociado 3.º

Reunidas las Juntas de Sanidad marítima y municipal en las Casas Consistoriales de la villa del Ferrol el día 13 del presente mes, y constituidas en sesión con asistencia del Vicedirector del cuerpo de Sanidad de la Armada, de los primeros y segundos médicos del mismo y de los facultativos del de Sanidad militar y civil residentes en la mencionada villa, reconocieron no existir un motivo fundado para que continuase la incomunicación que sufría el puerto del Ferrol, visto el inmejorable estado de salud que en la población y puerto se disfrutaba.

En su virtud acordaron solicitar del Gobierno de S. M. que se sirviese declarar limpio, levantando la rigorosa incomunicación que, con el laudable intento de impedir la propagación del contagio, poniendo á salvo los sagrados intereses de la salud pública, se impuso en la sensible, pero forzosa obligación de imponer.

Autorizadas por Real orden, que trasmitió el telegrafo, las referidas Juntas para proceder con arreglo á lo que las prescripciones de la ley, y las condiciones higiénicas y las necesidades de la localidad aconsejaban, consignaron, de común acuerdo con el anterior dictamen científico, la terminación de la enfermedad, que habían padecido algunos individuos de la dotación del vapor *Isabel II*, y declararon oficialmente limpio el puerto del Ferrol, dejando sujetos los buques procedentes del mismo á sus respectivas cuarentenas durante el espacio de 20 días que señala el art. 40 de la ley de Sanidad, cuyo espacio terminará el día 3 de setiembre próximo.

Lo que se publica para inteligencia de las Juntas de Sanidad marítima del reino y conocimiento del Comercio en general. Madrid 20 de agosto de 1858. — El Director general, Tomás Rodríguez Rubí.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense agosto 27 de 1858. — El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

En la Gaceta núm. 191 del sábado 10 de julio último se lee lo siguiente:

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO REAL.

REALES DECRETOS.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas.

A todos los que las presentes vieren y entendieren y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que ante mi Consejo Real pende en primera y única instancia, entre partes, de la una D. Martín Perez del Camino, Oficial primero cesante de la Secretaría general de Beneficencia del Reino, en su nombre y á virtud de poder, el licenciado D. Diego Montaut y Dutriz, su abogado defensor, demandante; y de la otra, la Administración general del Estado y en su representación mi Fiscal en dicho Consejo, demandada, sobre mejora de clasificación:

Visto el expediente gubernativo unido á los autos, del que resulta:

Que en 5 de setiembre de 1852 la Dirección general de Rentas y Contaduría general de Valores nombró á Perez del Camino escribiente de la Sección de Amortización que se iba á establecer en las oficinas de la provincia de Madrid.

Que al verificar este nombramiento, la Dirección general de Rentas procedió, autorizada por Real orden de 12 de julio de 1852, que mandó crear una Sección temporal con el objeto de activar los arbitrios de amortización y de la contribución de frutos civiles por término de seis meses, siendo la soberana voluntad de mi augusto padre que, si durante dicho término presentase trabajos importantes y de mucha consecuencia, podría continuar dando cuenta progresiva de sus adelantos; pero que si no correspondían á las grandes esperanzas que se formaban, quedaría suprimida dicha Sección.

Que en 27 de junio de 1855 fué nombrado Oficial tercero de la misma Sección, destinada solo á la contribución de frutos civiles.

Que en Junta celebrada por los Jefes de Rentas en 14 de marzo de 1842 se le nombró Oficial primero de la Sección, que se llamaba de frutos civiles.

Que cesó en este destino por orden del Intendente de Rentas de la provincia de Madrid de 21 de mayo del mismo año.

Que en 24 de mayo de 1844 me digné agregarle á la Comisión de Examen de cuentas atrasadas del Ministerio de la Gobernación de la Península.

Que suprimida por Real orden de 5 de enero de 1843 la Comisión de Cuentas atrasadas á que pertenecía Camino, quedó este cesante en 12 del mismo mes y año.

Que en 11 de enero de 1856 la Junta de Clases pasivas comunicó á Camino que habia acordado reconocerle cinco años y ocho meses de servicio, hábil, á contar desde 1.º de enero de 1849 en que tomó posesión del primer destino que obtuvo en propiedad, como Oficial segundo de la Secretaría general de la Junta de Beneficencia, no pudiendo ser de abono ninguno de los servicios anteriores por no haber sido prestados en plazas fijas de planta, aprobadas por mi.

Que Perez del Camino en 26 de febrero suplicó al Ministerio de Hacienda se clasificaran nuevamente sus servicios, abonándole los tres años, tres meses y seis días que no reconocía la Junta de Clases pasivas, y que componían los distintos servicios que quedan enumerados, fundándose en que los empleados de la Sección temporal no desempeñaban destinos con la cláusula de interinidad personal á que se refería la ley de presupuestos de 1855, pues lo eran en propiedad como indicaba su nombramiento.

Que la Junta de Clases pasivas informó en 16 de abril, que no habiendo prestado Camino el primer servicio de escribiente en la Sección temporal de Amortización y Frutos civiles, en plaza de planta aprobada, no podían ser abonables los cuatro siguientes por carecer del carácter de efectividad.

Visto el dictamen emitido por la Asesoría general del Ministerio de Hacienda en 5 de julio, opinando que debía revocarse el acuerdo de la Junta de Clases pasivas de 24 de enero de 1856, devolviéndole el expediente para que practicase nueva clasificación bajo la base del servicio antes referida.

Visto el dictamen de la Sección de Hacienda del Consejo Real, fecha 22 de diciembre, opinando que no podía accederse á lo solicitado por Perez del Camino.

Vista la Real orden de 8 de enero de 1856, confirmando el acuerdo de la Junta de Clases pasivas de 22 de enero de 1856.

Vista la demanda instaurada ante mi Consejo Real por el Licenciado D. Diego Montaut y Dutriz en 20 de octubre de 1857, pidiendo que se declarasen como de abono, para los derechos pasivos de Don

Martin Perez del Camino, los trece años, tres meses y seis días de servicio, tomados para base de carrera el nombramiento de escribiente que obtuvo en 5 de setiembre del año pasado de 1852:

Vista la contención de mi Fiscal en 11 de diciembre de 1857, pidiendo la confirmación de la Real orden reclamada:

Considerando que, según estas disposiciones, el tiempo servido por los empleados solo puede empezar á contarse desde el primer destino efectivo de planta que hayan servido en propiedad:

Considerando que estas circunstancias faltan precisamente en los destinos que sirvió D. Martín Perez del Camino desde 3 de setiembre de 1852 hasta 12 de enero de 1848, porque las dependencias á que fué destinado eran comisiones fuera de reglamento y temporales;

Oído mi Consejo Real en sesión á que asistieron D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vena, D. Manuel García Gallardo, D. Saturnino Calderón Collantes, D. Florencio Rodríguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Manuel de Sierra y Moya; Don José Ruiz de Apodaca, D. Antonio Gil de Zárate, D. Antonio Navarro de las Casas, D. José Antonio de Oláneta, D. Antonio Escudero, D. Diego López Ballesteros, D. Pedro Egaña, D. Fernando Alvarez, D. Manuel Moreno López, D. Fermín Salcedo, D. José Cayula, D. Modesto Cortázar, el Conde de Cleonard y D. Tomás Retortillo.

Vengo en absolver á la Administración de la demanda interpuesta por D. Martín Perez del Camino, y en confirmar la Real orden de 8 de enero de 1857.

Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858. — Esta rubricado de la Real mano.

El Ministro de la Gobernación, José de Rosada Herrera.

Publicación. — Leído y publicado el anterior Real decreto por mi el Secretario general del Consejo Real, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Uger, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 26 de junio de 1858. — Juan Suñé.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que ante mi Consejo Real pende por vía de recurso, entre partes, de la una D. Jaime Isern, vecino de Mataró, inventor de una máquina para enseñar á los ciegos las primeras letras, y á escribir en notas de música, y el Licenciado D. Carlos Lander, su abogado defensor, demandante; y de la otra la Administración general del Estado y en su representación mi Fiscal en dicho Consejo, demandada, sobre validez ó insubsistencia de la Real orden de 25 de enero de 1857, por la que se desestimó la solicitud de Isern, pidiendo que se le reintegrase en el goce de la pensión de 500 ducados anuales que le fué concedida en 5 de noviembre de 1829:

Visto: Vistos los antecedentes del pleito actual, de los que resulta:

Que habiendo acudido á mi augusto padre Jaime Isern, natural de Mataró, y ciego de nacimiento, exponiendo la imposibilidad en que se hallaba, por las pérdidas que habia sufrido su casa con la revolución de Méjico, para continuar trabajando en las máquinas inventadas por él para que los ciegos puedan escribir música y cualesquier concepto, mi augusto padre mandó que por la Colectoría general de Espolios y vacantes se

socorriese con alguna limosna diaria á dicho ciego de nacimiento; Real orden que se comunicó al Director del Conservatorio de Artes para que manifestara lo que se le ofreciese y pareciese acorra de las máquinas de que se trata, pudiendo comunicarse con el Intendente de Cataluña para hacer toda clase de indagaciones y observaciones sobre el particular:

Que en 15 de noviembre del mismo año pidió Isern se llevase á efecto la anterior soberana disposición, y se fijara la cantidad con que debía ser socorrido:

Que en 5 de diciembre mandó mi augusto padre que se socorriese al interesado con alguna limosna diaria desde el día que se comunicó la Real orden de 26 de febrero:

Que en 9 de abril comunicó al Intendente de Cataluña el Presidente de la Real Junta de Comercio de Cataluña el dictamen de su Comisión de Fomento:

Que de este dictamen, dado en 28 de marzo, se desprende, que con la máquina para aprender los ciegos á escribir habia posibilidad para expresar las ideas ó pensamientos que ocurren al que escribe, con la mayor exactitud y claridad; y que de la máquina para escribir música podían reportar los ciegos una utilidad bien conocida, por ser la música el arte ó profesión á que comunmente se dedican, y que el interesado reunía conocimientos no comunes y mucha inteligencia para mejorar y hacer mas llevadera la suerte de los desgraciados de su clase:

Que en 25 de setiembre de 1829 comunicó el Colector general de Espolios y vacantes, que en vista de las órdenes de S. M. habia señalado á Jaime Isern la pensión anual de 300 ducados sobre los fondos de la Subcolectoría de Tortosa:

Que en Real orden de 5 de noviembre de 1829 mi augusto padre se sirvió aprobar la pensión arriba mencionada:

Que por Real orden de 20 de diciembre de 1842, de conformidad con el dictamen de la Junta del Tesoro y su calificación, se declaró dudosa, como comprendida en la clase 7.ª, artículo 1.º del decreto de las Cortes de 11 de mayo de 1857, la pensión concedida en 5 de noviembre de 1829; y se mandó que se continuase su pago hasta que se determinara lo que correspondiera acerca de las pensiones de igual clase, sin perjuicio de que se le designara otra categoría si de la mayor instrucción del expediente resultaba que el interesado hubiera concluido las máquinas, motivo de la pensión:

Que en 20 de octubre de 1856 suplicó Isern se continuase abonando la pensión tantas veces citada, y sus atrasos desde agosto de 1855, en que la habia sido suspendida:

Visto el informe de la Junta de Clases pasivas de 4 de diciembre de 1856, manifestando que en sesión de 22 de octubre de 1855 habia aprobado la suspensión que habia creído conveniente el Contador de Hacienda pública de la provincia de Barcelona, que como el interesado no acompañaba á su nueva solicitud documento alguno, no habia motivo para variar el anterior acuerdo:

Visto el dictamen emitido por la Asesoría general del Ministerio de Hacienda en 16 de enero de 1857, opinando que procedía la suspensión de pago, acordada por la Contaduría de provincia de Barcelona, por no haber variado la categoría de la expresada pensión, como se indicaba en la Real orden de 20 de diciembre de 1842:

Vista la Real orden de 25 de enero de 1857, por la que me servi desestimar la solicitud de D. Jaime Isern, reservando al mismo el derecho concedido en el artículo 15 de la ley de Presupuestos de 1855:

Vista la demanda instaurada ante mi Consejo en 30 de setiembre del mismo año por el Licenciado D. Carlos Lander, pidiendo que se declare subsistente la pensión de 500 ducados concedida á

Isern por la Real orden de 5 de noviembre de 1829, mandando además se le abonaran los atrasos causados desde que se interrumpió su pago.

Vista la contestación de mi Fiscal en 15 de febrero de este año, pidiendo la confirmación de la Real orden reclamada.

Vista la disposición 3.ª, art. 1.º del decreto de las Cortes de 12 de mayo de 1837, relativa á las pensiones concedidas por servicios personales al Estado de conocida importancia y utilidad.

Visto el art. 15 de la ley de Presupuestos de 25 de julio de 1855.

Considerando que el ciego D. Jaime cumplió la oferta de construir las máquinas para que los ciegos pudiesen escribir letra cursiva y música.

Considerando que, además de ser notorias la importancia y utilidad de tales máquinas, resultan también comprobadas por el informe de la Junta de Comercio de Cataluña.

Considerando que de las diferentes Reales órdenes expedidas por mi augusto padre se deduce que al acordar el socorro de Isern, no solamente se propuso aliviar temporalmente su desgracia, sino premiar su ingenio y su invención con una recompensa permanente.

Considerando que por todo lo expuesto la pensión de que se trata está comprendida en la categoría 3.ª, artículo 1.º del decreto de las Cortes que se ha citado.

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel García Gallardo, Don Juan Felipe Martínez Almagro, D. Florencio Rodríguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Cayetano de Zúñiga y Linares, D. Manuel de Sierra y Moya, Don José Ruiz de Apodaca, D. Antonio Gil y Zárate, D. Francisco Tárries Hevia, Don Antonio Navarro de las Casas, D. José Antonio Olañeta, D. Antonio Escudero, D. Diego López Ballesteros, D. Pedro Egaña, D. Fermín Salcedo, D. José Caveda, D. Modesto Cortazar, el Conde de Cleonard y D. Tomás Retortillo.

Vengo en acceder á la demanda instaurada por D. Jaime Isern; en revocar mi Real orden de 25 de enero de 1857, y en mandar que se continúe pagando á Isern la pensión de 300 ducados anuales, abonándosele los atrasos correspondientes al tiempo en que el pago de dicha pensión ha estado suspendido.

Dado en Aranjuez á 20 de junio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mi el Secretario general del Consejo Real, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Uger, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 26 de junio de 1858.—Juan Sunyé.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 8 de julio de 1858, en los autos de competencia entre el juzgado militar de Marina de la provincia de Barcelona y el de primera instancia del distrito del Pino de la misma ciudad, acerca del conocimiento de la demanda propuesta en el último por Gila Garriga, viuda de Francisco Pavia, cesionario de Pedro Mora, contra D. Pedro Pagés y D. José Manau, como comisionados de los acreedores de Bartolomé Truch, sobre rendición de cuentas de los bienes de éste y pago de su crédito contra el mismo.

Resultando que por escritura de 20

de setiembre de 1852, Bartolomé Truch, patron y dueño, con siete mas, del laud *Dionisio*, cedió á sus condueños y á otros varios acreedores que tenían interés en el fondo de aquel, y de quienes era deudor, la parte que tenía en el casco del mismo, y otras cantidades y derechos que le pertenecían, dando aquellos por salidas y finiquitadas las cuentas, y nombrando, para llevar á efecto la cesión, á don José Manau y D. Pedro Pagés, también acreedores.

Resultando que Pedro Mora, que no intervino en la anterior escritura, dueño de 155 duros, importe de una de las partes en que estaba dividido el buque, cedió sus derechos y acciones á Francisco Pavia y Castabos, cuya viuda, Gila Garriga, dedujo demanda en 20 de junio de 1857 ante el Juzgado ordinario, en la que, sin reconocer en los comisionados otra calidad que la de detentadores de los bienes de Bartolomé Truch, pidió que se les condenase á manifestar el estado de ellos, rendir cuentas en el caso de haberlos enajenado, y entregarla el importe de su crédito.

Resultando que emplazados Pagés y Manau acudieron al indicado Juzgado de Marina entablando inhibitoria del civil ordinario, en atención á hallarse inscriptos en la lista de pilotos de Barcelona, según acreditaron con una certificación expedida por el segundo Comandante de dicho ramo, en la que además se expresa que D. Francisco y D. Jaime Maristany, interesados en el laud y comprendidos en la escritura referida, se hallaban también inscriptos, el primero como piloto y el segundo como patron.

Resultando que el Juzgado de Marina ofició de inhibición al civil ordinario, que se negó á ella, fundado en que Pagés y Manau no eran demandados en nombre propio, sino como representantes de otras personas tal vez de distintos y diferentes fueros, y que en otro pleito igual seguido á instancia de otro de los dueños del laud, se habían sujetado al fuero ordinario, sin haber opuesto la excepcion declinatoria.

Resultando que el Juzgado de Marina insistió en la inhibición, fundándose en que Pagés y Manau eran aforados de aquel ramo y se les demandaba personalmente, puesto que se les negaba la calidad de comisionados; que aun en este concepto, siendo el deudor aforado del ramo, él y sus bienes estaban sujetos á su jurisdicción, y que la sumisión que se decía hecha, prescindiendo de ser nula por hallarse prohibida, nunca significaba la renuncia del fuero en todos los demás pleitos.

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Gabriel Ceruelo de Velasco.

Considerando que intentada la demanda de estos autos contra D. Pedro Pagés y D. José Manau, como representantes de los acreedores de Bartolomé Truch, que celebraron con éste el convenio que tuvieron por oportuno para el pago de sus créditos, puede decirse que la demandante conceptuó en cierto modo semejante arreglo como una verdadera cesión de bienes, para la cual, y para todas sus incidencias, el fuero competente era el de Marina á que estaba sujeto el comun deudor.

Considerando además que, según los artículos 31 y 42, lit. 1.º de la Ordenanza de matrículas, toca al expresado fuero, con inhibición de cualquier otro, el conocimiento de todo litigio sobre cuentas por participación en la propiedad de una nave, siendo aforado el que ha de darlas, que es cabalmente el caso de los presentes autos.

Considerando, en fin, que la sumisión de los demandados en el otro pleito que se cita, aun teniéndola por eficaz, no los dejó obligados á reiterarla en el de que se trata, sino como representantes de los mencionados acreedores, entre los cuales los hay del referido fuero, siéndolo ellos mismos, pudieron recurrir, como lo hi-

cieron, á su Juez propio para que reclamase el conocimiento de este negocio.

Declaramos, que debemos decidir esta competencia á favor del Juzgado militar de Marina de la provincia de Barcelona, al que se remitirán unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho.

Y por la presente sentencia, de la que se pasarán copias certificadas para su publicación en la Gaceta de esta corte é inserción en la Colección legislativa, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

—Ramon López Vazquez.—Joaquín José Casaus.—Sebastián González Nandín.—Fernando Calderón Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Gabriel Ceruelo de Velasco, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública en su sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado, en Madrid á 8 de julio de 1858.—Gregorio C. García.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 27 de agosto de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

Número 451.

En la Gaceta del sábado 31 de julio último número 212 se halla inserto lo siguiente.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 29 de julio de 1858, en los autos de competencia entre el Juzgado de la Capitanía general de las Provincias Vascongadas y el de primera instancia de Riaza, acerca del conocimiento de la causa formada contra Manuel Rica Sierra, soldado del regimiento Infantería de Almansa, de guarnición en Vitoria, por robo de una manta y otros efectos á Florentina de la Villa, vecina de Madriguera, en la noche del 22 al 23 de marzo último.

Resultando que al referido Manuel Rica le fué concedida por el Capitan general del distrito, para marchar al pueblo de Madriguera á restablecer su salud, la licencia de cuatro meses, que empezó á usar en 1.º de noviembre del año anterior.

Resultando que en la noche del 22 al 23 de marzo del corriente se cometió un robo en la casa de Florentina de la Villa, vecina de Madriguera, y en la del 8 al 9 de abril otro en la casa-taberna de Estambela, pueblos ambos correspondientes al partido judicial de Riaza.

Resultando que procesado Manuel Rica Sierra por suponerse autor de dichos dos delitos, manifestó que era soldado del indicado regimiento; pero que desde que se le concluyó la licencia había pensado no regresar á él.

Resultando que dirigido suplicatorio al Capitan general de las provincias Vascongadas para averiguar la certeza de aquel particular, requirió de inhibición al Juez de primera instancia, que se negó á ella en atención á que el Manuel Rica Sierra era desertor y además había andado vagando y proyectando la perpetración de varios delitos, por cuyos hechos había perdido su fuero.

Resultando que el Juzgado de Guerra, fundado en que la ordenanza exige para calificar como desertor á un soldado que use de licencia la circunstancia de que haya transcurrido un mes después de espirado el término de ella, insistió en la competencia de la causa por el delito cometido el día 22 de marzo, desistiendo por la misma razón de la relativa al que tuvo lugar en la noche del 8 al 9 de abril.

Vistos; siendo Ponente el Ministro Don Gabriel Ceruelo de Velasco.

Considerando que Manuel Rica Sierra no podía ser calificado de desertor cuando

se cometió el delito objeto de esta competencia, mediante á que, con arreglo al artículo 15, título 30, tratado segundo de la Ordenanza del Ejército, para considerar con aquel carácter al soldado que use de licencia, es necesario el transcurso de un mes después de haber terminado el tiempo por que le hubiese sido concedida, circunstancia que no concurre en el presente caso, faltando por consiguiente el fundamento que en ella encuentra el Juzgado de Riaza para sostener su pretensión.

Considerando que el art. 1.º del decreto de 11 de setiembre de 1820, restablecido por el de 31 de agosto de 1836, solo somete á la jurisdicción ordinaria, cuando la aprehensión se verifique por la misma, el conocimiento de las causas contra desertores del Ejército ó de la Armada, calificación que no podía ser aplicada al soldado Manuel Rica en la fecha en que se perpetró el delito por que se halla procesado.

Considerando, por último, que tampoco es aplicable á la cuestión actual la ley 7.ª, título 17, libro 12 de la Novísima Recopilación, pues de su mismo contexto se infiere claramente que fué dictada contra los que delinquen reunidos ó en cuadrilla, lo cual confirman también las notas que á ella hacen referencia y las otras leyes que inmediatamente la preceden y subsiguen.

Declaramos esta competencia á favor del Juzgado de la Capitanía general de las Provincias Vascongadas, al que se remitan todas las actuaciones relativas al robo cometido en la noche del 22 de marzo último, devolviéndose las que se refieren al ejecutado en la del 8 de abril al Juez de primera instancia de Riaza, á quien se diga, que en lo sucesivo solo remita á este Supremo Tribunal la pieza ó piezas que sean absolutamente necesarias para resolver la cuestión que se haya promovido.

Y por la presente sentencia, de la que se pasarán copias certificadas para su publicación en la Gaceta de esta corte é inserción en la Colección legislativa, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon López Vazquez.—Sebastián González Nandín.—Fernando Calderón y Collantes.—Gabriel Ceruelo de Velasco.

Publicación.—Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilmo. Señor Don Gabriel Ceruelo de Velasco, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su sala extraordinaria el día de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado.

Madrid 29 de julio de 1858.—Gregorio C. García.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 27 de agosto de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guilian.

BANCO AGRÍCOLA DE BENEFICENCIA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Recomiendo muy particularmente á los señores Alcaldes y Curas párrocos de la provincia se sirvan advertir á sus respectivos domiciliarios por los medios que crean mas oportunos, concurren dentro del preciso término de quince dias á satisfacer al Banco agrícola los semestres que se hallan vencidos y de que estan en descubierto por los préstamos que llevaron antes de ahora; haciéndolo así, evitan apremios siempre ruinosos, no se estacionan los caudales y se atiende con ellos á otros que son acreedores y diariamente los estan solicitando. Orense 26 de agosto de 1858. — El G. P., Hermenegildo Guilian.—P. A. D. L. J., Santos Cid, secretario.

Lo que se inserta en este Boletín para conocimiento del público. Orense 26 de agosto de 1858. — El Gobernador, D. Benigno Salomón.

Delincuentes aprehendidos.	17	Delincuentes aprehendidos.	17	Reos prófugos aprehendidos.	2	Desertores aprehendidos.	2	Defendidos por falta de leyes y entregados a la justicia.	6	Armas recojidas.	3	Contrabandistas aprehendidos.	39	Total de presos conducidos en el mes.	870
----------------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	---	---	------------------	---	-------------------------------	----	---------------------------------------	-----

Estado número de las aprehensiones verificadas por la Guardia civil de esta provincia en el mes de julio último.

curador síndico y le de Escribano y en la corte en el Gobierno civil de aquella provincia; entendiéndose esta triple su- hasta respecto de las rentas cuyo tipo ex- ceda de 20,000 rs. y no pasando de esta suma en esta capital y en los partidos solamente quedando pendiente el remate de la aprobación de la Dirección general.

La licitación empezará por el orden que se figura en este anuncio y se admitirán posturas en pliegos cerrados a todos los interesados en la duración de media hora por cada partido, que tendrá este acto, y después se admitirán también proposiciones generales estando de ma- nifiesto los presupuestos y el pliego de condiciones que a continuación se inserta.

Partido de la Capital	118,599.60
de Allariz.	411,453.29
de Celanova.	23,734.85
de Ribadavia.	46,261.44
de Trives.	41,792.55
de Carballino.	27,040.28
de Ganzo.	5,803.59
de Bande.	14,306.5
de Viana.	1,171.68
de Valdeorras.	15,077.54
de Verin.	49,885.19

Modelo de proposición.

D. vecino de se comprometo a llevar en arrendamiento las rentas del partido de que figuran en el presupuesto formado por la Administración principal de Propie- dades, por la suma de rs. vellón, conforme en un todo con el pliego de condiciones formulado para este objeto, en virtud del cual ha entregado en la caja de depósitos de la Tesorería de esta provincia la fianza de que pre- viene la instrucción, según lo acredita el recibo adjunto.

(Fecha y firma.)

Orense 18 de agosto de 1858. — El Ad- ministrador principal, José de Torres Nuer.

Pliego de condiciones para la subasta de arriendo de rentas forales y de mas derechos que pertenecieron al Clero secular y regular, santua- rios y hermandades, encomiendas de las órdenes militares y de la de S. Juan de Jerusalén, y secuestros de particulares por frutos del pre- sente año.

- 1.º El remate se celebrará el día y hora que se cita el cual será triple y si- multáneo en esta capital, en los partidos y en la corte si la cantidad del tipo ex- cede de 20,000 rs., y si no pasase de esta suma se verificará en esta capital y en los partidos solamente quedando pendiente de aprobación de la Dirección general.
- 2.º No se admitirá postura menor que la que marcan los anuncios, debiendo acompañar al pliego de proposición el recibo de la caja de depósitos del 10 por 100 en concepto de fianza.
- 3.º El arrendatario satisfará por se- mestres adelantados el importe del ar- riendo si es de 20,000 rs. inclusive en adelante, por trimestres también adelan- tados, si excediendo de 500 no llegase a 20,000, y anualmente a su vencimiento cuando no pase de 500 rs.; pero alian- zando en este caso a satisfacción del Ad- ministrador principal.
- 4.º El arriendo se entiende por fru- tos de la presente cosecha, que princi- piará a contarse en 1.º de setiembre y concluirá en 30 de agosto de 1859.
- 5.º No se admitirán posturas a nin- guño que sea deudor a los fondos del Es- tado.
- 6.º Los arrendatarios no tendrán de-

- recho para pedir perdón o rebaja, ni so- licitar pagar en otros plazos ni en distin- ta especie que la estipulada; el contrato ha de ser a suerte y ventura, sin opción a ser indemnizados por extinción de lan- gosta, pedrisco u otro incidente impre- visto.
 - 7.º Si no cumplieren la obligación de pago en los terminos contralados, que la- rán sujetos a la acción que contra ellos intente la Administración principal, y a satisfacer los daños y perjuicios que que- dieren lugar. Si llegase al caso de ejecu- ción para la cobranza, se entenderá res- cindido el contrato en el mismo hecho y se procederá a nuevo arriendo en que- bra.
 - 8.º Satisfarán de su cuenta y riesgo en la Administración principal de pro- piedades, y en monedas de oro y plata, el importe del arriendo, en los plazos mar- cados.
 - 9.º No sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos a los escribanos, fees de fechos y preavergos, y del pa- pel que se invierta en el expediente y es- crituras.
 - 10.º No podrán utilizarse de mas ren- tas que las que figuran en los presupe- stos y que por consecuencia se compren- derán en las listas cobratorias que les facilite la Administración, con referen- cia a los inventarios, quedando sujetos a las penas de instrucción los arrendatarios o colonos que clandestinamente se apro- veechen de otras rentas sujetas, actual- mente al dominio de la investigación, y otros expedientes que se hallan iniciados por esta Administración principal.
 - 11.º Si transcurridos ocho días des- pués que se comparezca a los arrendata- rios la aprobación del contrato, no hu- biesen realizado el primer semestre o trimestre, según la cantidad en que con- sistiera el arriendo, sin derecho alguno a reclamación, además de quedar respon- sables al resultado de la nueva subasta en- quiebra, perderán desde luego la canti- dad que tengan depositada.
 - 12.º Se han eliminado de los actuales presupuestos todas las rentas redimidas hasta el día, y en el caso de que resulte comprendida indebidamente alguna, pre- vio el expediente de instrucción, se le abonará en cuenta al arrendatario.
 - 13.º Las bajas hechas en los presu- puestos por rentas redimidas, que no re- sulten comprendidas en los inventarios, serán imputadas a los arrendatarios, y producirán un aumento al cargo de sus cuentas, en proporción de las rentas que se hallen en este caso.
 - 14.º El importe del arriendo deberá satisfacerse precisamente con arreglo a la condición 3.ª, sin que pueda servir de pretexto para no ingresar por completo el importe de los semestres dentro del día mismo del vencimiento, el que ale- guen bajas por partidas fallidas, con la sola mira de eludir la puntual observan- cia del pago; pero si antes de que venza el último semestre acreditasen legítima- mente la incobrabilidad o falencia de al- guna renta, se les tomará en considera- ción en el interin, no se instruya el expediente y exija la aprobación superior.
 - 15.º Además de las condiciones espre- sadas, los arrendatarios quedarán sujetos a las que particularmente se hallan esta- blecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre del país, siempre que no se opongan a las contenidas en este pliego.
- Orense 17 de agosto de 1858. — José de Torres Nuer.

JUNTA DE LA DEUDA PÚBLICA.

Habiendo padecido extravío en los lla- nos de Camina, cerca de Jerez, un cajon que contenia 4,000 títulos de la deuda del personal, Serie A, números 182,501 a 183,500 al conducirlos a esta corte en la silla correo que salió de Cádiz el día 3 de setiembre de 1856, y como no hayan producido resultado alguno cuantas dili-

gencias se han practicado para averiguar su paradero, la junta en sesión de este día ha declarado fuera de circulación los men- cionados créditos, considerándolos en su consecuencia nulos y de ningún valor ni efecto.

Igual declaración ha hecho respecto a 20 acciones de ferrocarriles de Aranjuez a Almansa, números 38,501 a 40,500, que al ser conducidas a España por el vapor inglés Madrid, xayeron al mar en el nau- fragio de dicho buque, accediendo al entra- da de la ría de Vigo en la tarde del 20 de febrero de 1857.

La que se avisa al público para su co- nocimiento. Madrid 13 de agosto de 1858.

V.º B.º — El Director general, Presi- dente en comision, Roda. — El Secretario, Angel E. de Heredia.

Juzgado de 1.ª instancia de la Coruña.

Don Benigno Salomón, socio de nú- mero de la sociedad económica de amigos del país de Valencia, académico correspon- diente de la Real academia de la historia y de la española de arqueología, caballe- ro de la Real orden americana de Isabel la Católica por acción de guerra, secreta- rio honorario de S. M. juez de hacienda de la provincia y de primera instancia del partido a que da nombre esta capital.

A los señores jueces del primer instancia, Alcaldes constitucionales, comandantes de los distacimientos de la Guardia civil y demás autoridades del los pueblos de la provincia de Orense, a quienes atentamen- te saludo en nombre de S. M. la Reina Nuestra Señora (q. D. g.), exorto y re- quiero y de mi parte ruego y encargo a V. SS. que con el celo que tanto les caracte- riza y distingue, se sirvan practicar las mas eficaces diligencias en averiguación de si en algunos de los pueblos residen en la actualidad D. Pedro Fernández La- tieran, D. Nicolas Talanda, D. Castor Apolaza, D. Pedro Chaves, D. José Gar- cia Cojin, D. Tomás Giron y Morejon, los cuatro primeros Comandantes y los dos últi- mos mayores que han sido entre otros del presidio de esta plaza desde el año de 1846 a 1856; D. José Calé, D. Gabriel Sánchez Urrutia, D. Antonio Blanco, D. Antonio Campos, D. José Chaceton, capataces; D. José Maria Roy, Juan Maquieira Vila- rino, Juan Spland Martin, Santiago Avila Guzman y Ventura Paderni, escribientes, que también han sido de la mayoría del expresado presidio en la citada época, y darme desde luego el oportuno aviso, pues así lo tengo acordado en la causa que estoy instruyendo por testimonio del su- tuario contra Pio Robles Reimundez so- bre sospechas en su conducta, y en averi- guncion igualmente de cuándo y por quién se sustrajeron los testimonios de varias co- denas que se le impusieron y existian en la mayoría del referido establecimiento penal, del que salió hace tiempo supo- niendo haber extinguido aquellos que- dando yo al tanto en iguales o parecidos casos y siempre muy reconocido. Dado y firmado en la Coruña a 21 de agosto de 1858. — Benigno Salomón. — Por mandado de S. S., Manuel M. Suarez.

Juzgado de Hacienda de Lugo.

Por el mismo Juzgado se cita, llama y emplaza a Maria Piqueiro y Garcia, natural y vecina de San Miguel de Rosende, Ayuntamiento de Sobor, partido judicial de Monforte, para que en el término de treinta días se presente ante el mismo a responder de los cargos que contra ella resultan en la causa que se le formó por delito de contrabando y bajo apercibi- miento que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar. Dado en Lugo a 22 de agosto de 1858. — José Maria Ulloa. — Por mandado de S. S., Francisco Abuin y Torres.